

## **Carácter de dato de salud de los datos sobre drogodependencia. Informe 182/2004.**

### **Datos de salud. Drogodependencia**

La consulta plantea si resulta conforme a las previsiones contenidas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, la cesión a la Administración Autonómica de los datos referidos a las personas a las que la entidad consultante presta un servicio de atención, dada su condición de drogodependientes. En particular, se indica que dicha información contendría respuestas a un total de 23 preguntas contenidas en un cuestionario, en la que se incluiría, entre otras, la dolencia que, en su caso, pudiera padecer el interesado.

Como cuestión previa, debe indicarse que en el presente supuesto nos encontraremos ante una cesión o comunicación de datos de carácter personal, definida por el artículo 3 i) de la Ley Orgánica 15/1999 como “Toda revelación de datos realizada a una persona distinta del interesado”, que además vendría en todo caso referida a datos relacionados con la salud de las personas.

En este sentido, es preciso indicar que el apartado 45 de la Memoria Explicativa del Convenio 108 del Consejo de Europa, sobre protección de los derechos de las personas en lo que se refiere al tratamiento de sus datos viene a definir la noción de “datos de carácter personal relativos a la salud”, considerando que su concepto abarca “las informaciones concernientes a la salud pasada, presente y futura, física o mental, de un individuo”, pudiendo tratarse de informaciones sobre un individuo de buena salud, enfermo o fallecido. Añade el citado apartado 45 que “debe entenderse que estos datos comprenden igualmente las informaciones relativas al abuso del alcohol o al consumo de drogas”.

Del mismo modo, en la Recomendación nº R (97) 5, adoptada por el Comité de Ministros del 13 de febrero de 1997, relativa a protección de datos médicos, se determina que la expresión “datos médicos” hace referencia a todos los datos de carácter personal relativos a la salud de una persona. Afecta igualmente a los datos manifiesta y estrechamente relacionados con la salud, así como con las informaciones genéticas.

En consecuencia, el mero hecho de la drogodependencia de la persona, dato necesariamente asociado a la asistencia prestada por la entidad consultante, así como por la indicación de la sustancia consumida, habría de ser considerado un dato relacionado con la salud, por lo que la comunicación de los datos incluiría datos de esta naturaleza, incluso en el supuesto de que el afectado no sufriera ningún tipo de dolencia.

En este sentido, debe considerarse que en el presente caso nos encontraríamos ante una cesión de los mencionados datos, incluso aún cuando la transmisión no se produjera en el momento de facilitar sus datos identificativo. Ello se debe a que, tal y como se indica en la consulta, la

información referente al consumo de estupefacientes, así como a la situación sanitaria de los afectados habría sido previamente comunicada a la Administración, aunque sometida a un previo procedimiento de disociación, definido por el artículo 3 f) de la Ley Orgánica 15/1999 como “Todo tratamiento de datos personales de modo que la información que se obtenga no pueda asociarse a persona identificada o identificable”.

Sin embargo, dado que en la comunicación previamente realizada se identificaban los afectados por un código formado por las iniciales de su nombre y apellidos, la comunicación de los mismos a la Administración permitiría asociar los datos previamente facilitados con los datos identificativos de las personas sin que ello implicase en ningún caso un esfuerzo desproporcionado, obteniéndose así un tratamiento de datos de carácter personal de personas completamente identificables.

Dicho lo anterior, el artículo 7.3 de la Ley Orgánica 15/1999 establece que “Los datos de carácter personal que hagan referencia al origen racial, a la salud y a la vida sexual sólo podrán ser recabados, tratados y cedidos cuando, por razones de interés general, así lo disponga una Ley o el afectado consienta expresamente”.

Esta regla sólo queda exceptuada en los supuestos previstos en los artículos 7.6 y 8 de la Ley, según los cuales “No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores podrán ser objeto de tratamiento los datos de carácter personal a que se refieren los apartados 2 y 3 de este artículo, cuando dicho tratamiento resulte necesario para la prevención o para el diagnóstico médicos, la prestación de asistencia sanitaria o tratamientos médicos o la gestión de servicios sanitarios, siempre que dicho tratamiento de datos se realice por un profesional sanitario sujeto al secreto profesional o por otra persona sujeta asimismo a una obligación equivalente de secreto” y “Sin perjuicio de lo que se dispone en el artículo 11 respecto de la cesión, las instituciones y los centros sanitarios públicos y privados y los profesionales correspondientes podrán proceder al tratamiento de los datos de carácter personal relativos a la salud de las personas que a ellos acudan o hayan de ser tratados en los mismos, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación estatal o autonómica sobre sanidad”.

Dado que el supuesto planteado no parece tener encaje en ninguno de los previstos en los preceptos anteriormente indicados, únicamente procedería la comunicación de los datos en caso de que el interesado prestase su consentimiento o así lo dispusiera una norma con rango de Ley.

En este punto, debe recalcar que el Tribunal Constitucional, en su Sentencia 292/2000, de 30 de noviembre, considera que la excepción al consentimiento se encuentra sometida al principio de reserva de Ley, consagrado por el artículo 53.1 de la Constitución, de tal suerte que no resultaría en ningún modo admisible justificar la comunicación en una norma que no ostentase rango de Ley formal, por lo que no sería posible amparar la comunicación en una norma reglamentaria si la cobertura no viene amparada por una Ley.

En el supuesto planteado, la comunicación parece ampararse exclusivamente en normas reglamentarias adoptadas por el Gobierno autonómico, de modo que a menos que conste la existencia de una norma con rango de Ley que habilite la cesión de los datos, la misma no se encontraría amparada por la Ley Orgánica 15/1999 si no cuenta con el consentimiento de los afectados.